Globethics Repository



El continente invertido [The continent inverted]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Hoffman, Kelly
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-10 04:25:08
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218793

El continente invertido

Desigualdades en América Latina

Kelly Hoffman
Miguel Angel Centeno

América Latina es la región que registra las mayores desigualdades en la distribución de recursos. Este documento define un conjunto de elementos que caracterizan a las estructuras sociales de ese continente, sugiere algunas líneas de análisis y respalda la incorporación de los estudios regionales a una discusión más amplia sobre la estratificación. Se propone una revisión de la situación del continente como un todo, incluyendo una breve discusión sobre la relación entre pobreza y desigualdad. Seguidamente, se aborda el tema de las clases y se concluye con la identificación de tres factores críticos para explicar la desigualdad en América Latina: su ubicación dentro del sistema económico mundial, el colonialismo interno con perpetuación de las categorías raciales y el subdesarrollo de las estructuras estatales.

El estudio de la injusticia está en el centro de la imaginación sociológica. Las interrogaciones clásicas de la disciplina giran alrededor de la distribución del poder y de los recursos: quién obtiene qué, y por qué, siguen siendo las

Kelly Hoffman: profesor del Departamento de Sociología, Universidad de Princeton, New Jersey; @: <khoffman@princeton.edu>.
Miguel Angel Centeno: profesor del Departamento de Sociología, Universidad de Princeton, New Jersey; @: <cenmiga@princeton.edu>.
Palabras clave: desigualdad, clase, estructura social, América Latina.

preguntas fundamentales que debemos formular. Y en ningún lugar las respuestas son más sorprendentes que en América Latina, a la que llamamos «el continente invertido», no solo por su contorno semejante a una pirámide invertida, sino porque la asignación de bienes, servicios y oportunidades básicas se encuentra igualmente desequilibrada.

Una región que supera los 500 millones de habitantes y con más de 20 países de diversas combinaciones raciales e historias económicas, modelos y proyectos divergentes, escapa a las generalizaciones fáciles. Sin embargo, la literatura brinda suficiente evidencia como para hablar de una experiencia común, y estos rasgos compartidos deben ser incluidos en cualquier discusión sobre la estratificación en América Latina.

Tabla 1

El clásico triunvirato de derechos de T.H. Marshall

	Civiles	**Políticos**	**Sociales**
Género	Derechos de propiedad restringidos durante el siglo XIX. Protección contra la violencia familiar todavía mínima.	Sufragio universal para 1960.	La feminización de la tendencia de la pobreza no es clara, pero las mujeres aún enfrentan brechas educativas y de ingresos.
Raza	Los países andinos tienen leyes discriminadoras hasta bien entrado el siglo XX. Los pueblos indígenas sufren mayor segregación formal que los negros.	Movimientos indígenas en los Andes en los años 80. Movimientos de derechos civiles de los negros todavía subdesarrollados.	Institucionalización informal de estatus por casta. Pocas políticas de acción afirmativa. Claro efecto negativo en el estatus socioeconómico.
Clase	Derechos de organización del trabajo restringidos, pero establecimiento de sindicatos en el siglo XX.	Respuestas populistas más que de izquierda. Partidos socialistas débiles, excepto en Chile. Sufragio bastante efectivo en el Cono Sur y en los Andes septentrionales; más limitado en otras partes.	En el Cono Sur, cierto éxito en la creación del Estado de Bienestar, debilitado recientemente. Cuba aún es un caso atípico.
Globales	Cierta presión creciente en relación con derechos humanos.	Al menos una semblanza de democracia impuesta.	El neoliberalismo ha aumentado la desigualdad y debilitado el Estado de Bienestar.

Este análisis comienza, sin embargo, con algunas limitaciones explícitas. Una discusión sobre desigualdad puede abarcar muchas posibles divisiones y medidas. La tabla 1 presenta un sumario de la clásica tríada de derechos de Marshall, cruzado con las ahora categorías estándar de género, clase y raza. Le hemos añadido una dimensión global, que creemos particularmente importante para la región. A pesar de que tanto las estructuras políticas como civiles subyacen en la deficiente distribución de derechos sociales, a los cuales hacemos alguna referencia, hemos limitado nuestra discusión a la asignación de recursos. Más aún, para los fines de este estudio hemos seleccionado un número reducido de casos. Comenzamos con una revisión de la situación del continente como un todo, que incluye un breve examen sobre la relación entre pobreza y desigualdad, en el que también se alude a nuestra preocupación respecto a los datos disponibles.

La combinación de pobreza y desigualdad convierte a América Latina en un espacio donde la miseria adquiere una forma particular

¿Cuán desigual es la distribución de recursos?

Partimos de una definición básica de la desigualdad como distribución de recursos en la sociedad (Ramos). Prácticamente en todos los estudios sobre el tema se caracteriza a América Latina como la más desigual de las regiones del mundo (Berry; Cardoso/Helwege; O'Donnell/Tokman; Portes/Hoffman; Rosenthal).

Como se muestra en la tabla 2, el nivel de desigualdad encontrado en el continente desafía toda descripción y comprensión[1]. Las comparaciones entre regiones son difíciles, sin duda, pero estas características de distribución no son compartidas por ningún otro conjunto de países definido por cualquier otro criterio de categorización. El 5% superior de la escala de ingresos latinoamericana recibe el doble de la cuota-parte de su similar en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo), mientras que la porción inferior recibe la mitad de lo que reciben en esos mismos países (Portes/Hoffman).

Los efectos de este sistema de distribución se agravan por el hecho de que, con algunas excepciones significativas, las sociedades latinoamericanas son relati-

1. Algunas organizaciones internacionales han publicado estadísticas confiables sobre desigualdad que son usadas con frecuencia en estudios sobre América Latina: los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial; de la Cepal, el *Anuario Estadístico para América Latina y el Caribe*, el Panorama Social de América Latina; y los Indicadores de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Tabla 2

Desigualdad comparativa

	Gini	Relación del consumo del 20% más rico y el 20% más pobre
Bolivia 1999	44,7	12,4
Brasil 1998	60,7	29,7
Chile 1998	56,6	18,6
Colombia 1996	57,1	20,3
Costa Rica 1997	45,9	11,5
Ecuador 1995	47,4	10,5
El Salvador 1998	52,2	17,2
Guatemala 1998	55,8	15,8
Honduras 1998	56,3	27,4
México 1998	53,1	16,5
Nicaragua 1998	60,3	27,9
Panamá 1997	48,5	14,8
Paraguay 1998	57,7	31,8
Perú 1996	46,2	11,7
Uruguay 1989	42,3	8,9
Venezuela 1998	49,5	17,7
África	45	9,7
Asia del Este y Pacífico	38,1	6,5
Asia del Sur	31,9	4,5
América Latina	49,3	11,8
Países industriales	33,8	6,3

vamente pobres[2]. Así, no solamente los más pobres, los más morenos y las mujeres reciben las tajadas más pequeñas, sino que el tamaño de la torta social ni siquiera es grande. El PNUD estima que más de la mitad de la población de algunos países latinoamericanos vive con menos de dos dólares al día. La Cepal calcula que más de 200 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza (O'Donnell/Tokman). Haití sigue siendo el más desaventajado, con un tercio de su población con expectativa de vida inferior a los 40 años (Gafar).

La combinación de pobreza y desigualdad convierte a América Latina en un espacio donde la miseria adquiere una forma particular (ver figura). Los latinoamericanos viven peor de lo que deberían: la correlación entre el PIB y el

2. Las estimaciones de los niveles de pobreza son sumamente discutibles. Por ejemplo, en cinco estudios diferentes sobre la pobreza efectuados en 1994 en México, el nivel de pobreza reportado variaba del 19,7% al 46%. Los cálculos sobre pobreza dependen fuertemente tanto de la definición del término como de las técnicas estadísticas usadas, y todavía no existe un índice de pobreza uniforme que sea ampliamente aceptado (Londoño; Lustig; Mamalakis).

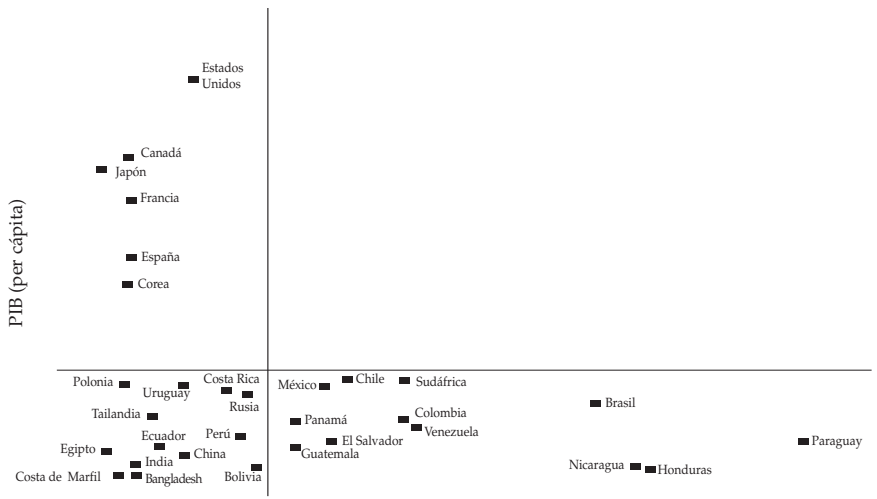
Índice de Desarrollo Humano del PNUD declina cuando se incorpora en la muestra a los países latinoamericanos, lo que indica que los niveles de vida son más bajos de lo que anticipa el ingreso nacional. La evidencia señala asimismo que la miseria que afecta a grandes sectores de la población no proviene solamente de la pobreza, sino que es básicamente una consecuencia de la radicalmente asimétrica distribución (Birdsall/Londoño).

Lo impactante de América Latina es que incluso la distribución de la desigualdad es sesgada: el índice de Gini para el 90% inferior de la población es comparable al de los países del mismo nivel de desarrollo; lo que separa a América Latina es el nivel de concentración en el decil superior (Portes/Hoffman). Los economistas señalan que América Latina tiene un «exceso de desigualdad»: si el nivel de desigualdad fuera el mismo que en los países con tasas comparables de desarrollo, la tasa de pobreza se reduciría a la mitad (Colburn).

El crecimiento disminuye la pobreza, pero nunca al extremo de poder esperar una reducción en los niveles de desigualdad. El crecimiento equitativo nunca ha existido en América Latina (Altimir 1994); sería más fácil reducir sustancialmente los niveles de miseria y de pobreza a través de cambios en la distribu-

Gráfico 1

Riqueza y desigualdad



Es probable que los verdaderos niveles de pobreza y desigualdad a nivel individual sean peores de lo que señalan las cifras de consumo familiar

ción que a través del crecimiento real (Paes de Barros/Mendonça). Por ejemplo en el caso de Brasil, el milagro de la economía de posguerra hizo poco para «atenuar altas concentraciones de ingresos en manos de la elite» (Wood/Magno de Carvalho, p. 3). En términos de crecimiento económico, América Latina se beneficia muy poco de la desigualdad (Fields). A pesar de la concentración de riqueza en Argentina, por ejemplo, la inversión nacional fue del 8% del PIB durante la mayor parte de los años 80 (Cetrangolo; Richards). Podía parecer que todo el país se ubicaba en el lado equivocado de la curva de Kuznets[3].

La distribución desigual no es un tema nuevo, ni un producto de las últimas décadas, aunque hay evidencias que indican que las políticas neoliberales han contribuido al aumento de la desigualdad. Históricamente, Latinoamérica ha tenido tasas elevadas en este rubro, incluso durante el *boom* de la posguerra (Altimir 1997). Entre 1950 y 1970, la industrialización y la urbanización impulsaron la movilidad social ascendente en algunos sectores de la población económicamente activa (Oxhorn); sin embargo, a partir de los años 70, casi todos los países experimentaron un aumento en la concentración del ingreso y la riqueza, con la sola excepción de México y Venezuela durante esa década y de Colombia en los 80 (Altimir 1994; Portes/Hoffman; Psacharopoulos et al.; cons. Fields sobre discrepancias en el aumento de la desigualdad).

Aunque no hay cifras disponibles en torno de la riqueza, hay indicios que sugieren que la concentración sería aún más sesgada si se la tomara en cuenta. En Santiago de Chile la participación en el consumo del quintil inferior disminuyó el 42% entre 1969 y 1988, mientras que la del quintil superior aumentó en un 23% (Berry, p. 16). Rosenthal estima que, durante la primera parte de los años 90, el 25% más pobre de la población perdió más del 10% de su capacidad de consumo, mientras que los más ricos la aumentaron en un 15%. En México, la desigualdad ha aumentado desde que se introdujo el libre mercado: entre 1984 y 1994 el ingreso absoluto del 10% más rico de la población aumentó un 20,8%, mientras que el ingreso del 10% más pobre declinó en 23,2% (Russell). Los coeficientes de Gini aumentaron en prácticamente todos los países de América Latina, según el PNUD.

3. Kuznets (1979) postuló que, a medida que las sociedades se desarrollan, el crecimiento económico conduciría inicialmente a un aumento de la desigualdad en el ingreso, seguido de una disminución de esta desigualdad aparejada al aumento del desarrollo y el crecimiento.



Los efectos de la distribución desigual han sido exacerbados por la crisis económica. Los ingresos per cápita en la región, considerada como un todo, disminuyeron entre el 10% y el 11% durante la década de 1980 (Berry; Psacharopoulos et al.). El colapso alcanzó proporciones bíblicas en algunos países: en Argentina el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza se triplicó a lo largo de una década y alcanzó el 29% en 1990 (Kaufman). En Lima, el consumo promedio en los hogares disminuyó en un 55% durante la segunda mitad de los años 80 (Glewwe/Hall). Las acciones globales de bienestar social disminuyeron en la región en un 15%. En San Pablo, las favelas albergaban al 1,1% de la población en 1970, mientras que en 1993 esa proporción había ascendido al 19,4% (Caldeira).

Es muy probable que los verdaderos niveles de pobreza y desigualdad a nivel individual sean considerablemente peores de lo que señalan las cifras de consumo familiar, debido a que estos valores no dan cuenta del número de componentes de la unidad familiar integrados a la fuerza de trabajo. Esto lleva a ignorar la creciente tendencia a la «autoexplotación», por la cual cada vez un mayor número de miembros de la familia dedica más horas de trabajo a actividades por lo general no remuneradas monetariamente (Cortés). Figueroa se refiere a una ruptura del «equilibrio distributivo» en América Latina, con la consecuente desintegración de la vida pública. Esto desencadenó una verdadera ola de crímenes en las ciudades latinoamericanas, con una respuesta policial brutal en directa correlación con el nivel de ingresos: la policía de San Pablo mató a 1.475 civiles en 1992, en contraste con los 25 eliminados ese mismo año por la policía de Los Ángeles. La violencia de la vida diaria asume variedades infinitas (Scheper-Hughes); en Buenos Aires, la violencia fue la principal causa de muerte entre la población adulta de los barrios de clase trabajadora y representó el 30% de la mortalidad total (Arrossi).

El grado de desigualdad tiene implicaciones reales sobre la salud y el bienestar en toda América Latina. Los servicios de salud varían considerablemente de un vecindario a otro dentro de la misma ciudad. En Buenos Aires, por ejemplo, el porcentaje de población sin asistencia médica varía de 19,5% en los barrios ricos, hasta más del 40% en muchos vecindarios pobres. El porcentaje de viviendas sin sanitarios (inodoros con agua corriente) oscila de menos del 2% a casi el 17%. La tasa de mortalidad infantil en algunos barrios pobres es dos veces mayor que la de las áreas más ricas (Arrossi). En Ciudad de México, la mayor parte de los asentamientos irregulares que albergan a la población de más bajos ingresos no tiene acceso a los servicios de salud pública. Esto hace que, en muchos casos, los pobres tengan que pagar para recibir atención médica privada. En

contraste, los vecindarios más ricos están eficazmente cubiertos por los servicios estatales de salud (Ward). En Monterrey, México, más del 90% de las casas de los barrios más ricos disponen de servicio de agua potable y alcantarillado, mientras que en los vecindarios más pobres sólo el 49% de las viviendas tiene agua potable, y únicamente el 35,3% alcantarillas.

A lo largo de toda América Latina también podemos hablar de bolsones de miseria que parecen resistir todos los esfuerzos orientados a erradicarlos

Las cifras sobre la segunda mitad de los años 90 son escasas y difíciles de analizar. Los estudios más optimistas muestran que el *boom* del inicio de los 90 redujo los niveles de pobreza en algunos países, pero también produjo mayor desigualdad (Korzeniewicz/Smith 2000; Sheahan). Por ejemplo, en Chile los niveles de pobreza experimentaron un descenso importante poco después de la democratización (de 44% en 1988 a poco más del 20% una década más tarde) aunque, en los hechos, los niveles de desigualdad aumentaron durante ese mismo periodo (Vergara). Argentina y Venezuela, por otro lado, sufrieron recientemente una disminución catastrófica de los niveles de empleo y un aumento de la pobreza, mientras siguen apabulladas por la desigual distribución del ingreso, que se ha intensificado durante la última década. En Buenos Aires, durante los 20 años anteriores a 1995 la participación en el consumo del 30% más pobre de la población descendió en un 36%, en tanto que la del decil superior de la población aumentó en un 44% (Auyero). En esta misma ciudad los salarios disminuyeron en un 40% y las tasas de pobreza aumentaron en dos tercios durante los años 90 (Kessler). Sin embargo, las transformaciones más dramáticas probablemente hayan ocurrido en Cuba, donde el retorno del capital extranjero y la privatización de algunos sectores de la economía han dado origen a una especie de «*apartheid* del dólar» (Centeno/Font; Tejada).

Hay una tendencia clara y prácticamente general en toda América Latina: la erosión de las clases medias (Cetrangolo; Grün; Kessler; Minujin; O'Dougherty). Durante la década de los 80, el segundo y tercer cuartil de la población experimentaron dramáticas pérdidas que llegaron hasta el 30% de sus ingresos en algunos casos (Minujin). Argentina representa un caso extremo en lo que podría llamarse el surgimiento de los nuevos pobres. En 1970 sólo el 3% de los residentes de Buenos Aires eran pobres, pero en 1990 ese número había aumentado a casi el 20%. Ese proceso se ha acelerado en los últimos cinco años, y en la actualidad diversas fuentes indican que la mitad de la población del Gran Buenos Aires podría ser considerada pobre.

En muchos países la respuesta a todo esto ha sido el «fracasismo», que combina el sentimiento de desesperación con un regreso a las críticas culturales que atribuyen a América Latina una innata vocación de fracaso (Minujin). Un número cada vez mayor de profesionales dominados por la desconfianza en sus gobiernos y en sus posibilidades de acción se ha unido a sus paisanos pobres frente a las embajadas buscando visas que les permitan emigrar hacia el Norte. Aquellos que se quedan buscan refugio en enclaves donde no necesitan interactuar con la miseria que los rodea, y donde la «estética de la seguridad» es publicitada como un «modo de vida» (Caldeira).

¿Qué justifica esos niveles de desigualdad?

La tenencia de la tierra sigue parámetros todavía medievales en el continente latinoamericano. Prácticamente en todos los países de la región, la elite agrícola ha mantenido una cuota elevada de poder político y social (Cortés Conde) y la noción de colonialismo interno es todavía relevante (González Casanova; Paige). Hasta bien avanzada la década de los 80, el 80% de las tierras en Brasil estaba ocupado por propiedades de 100 hectáreas o más, mientras que las de menos de 10 ha. ocupaban el 2,5% de la tierra (Reynolds). Menos del 1% de las propiedades agrícolas alcanzaba más de 1.000 ha., aunque cubría el 43% de la tierra (Wood/Magno de Carvalho). En Guatemala, el 85% de las familias del área rural necesitaba tierras, mientras que el número de unidades familiares sin ningún acceso a la tierra era de 185.000; de otro lado, el 2,3% de las haciendas cubría dos tercios del territorio cultivable (Barillas et al.). México constituye una posible excepción a esta tendencia por la redistribución formal de las tierras pertenecientes a las elites agrarias que se efectuó durante el siglo XX, sin que ello haya implicado un descenso en los niveles generales de desigualdad.

Durante la década de los 70 los pobres estaban concentrados en las áreas rurales. Los datos sobre Brasil muestran que los peores niveles de desigualdad y condiciones de vida se encuentran en las áreas dominadas por la producción agrícola (Leme/Biderman). Durante los años 80, en algunos países latinoamericanos el 80% de los pobres vivía en el campo (Selowsky)[4], en tanto que la disminución de los niveles de miseria puede haberse debido a la masiva migración hacia las ciudades que se ha registrado durante los últimos 40 años. Las

4. La ruralización de la pobreza puede ser mejor apreciada si se considera que, durante muchos años, las capitales de los países latinoamericanos podían equipararse a las de sus similares europeas, mientras la miseria permanecía oculta en el campo. Los países latinoamericanos han sido siempre una «paradójica mezcla de esplendor y decadencia» (Mollenkopf/Castells 1991, p. 8).

tasas de pobreza rural disminuyeron un 14% entre 1970 y 1990, mientras que las de las ciudades aumentaron en un 30% (Rosenthal).

A lo largo de toda América Latina también podemos hablar de bolsones de miseria que parecen resistir todos los esfuerzos orientados a erradicarlos. Quizás el más tristemente célebre se encuentra en Brasil, donde en los 80 se registraba una brecha de 25 años entre las expectativas de vida de los pobres del Nordeste y los ricos del Sur (Wood/Magno de Caravalho, Scheper-Hughes). La zona cordillerana del continente, desde los Andes hasta México, alberga a un campesinado que subsiste con sólo una fracción de lo que corresponde a sus paisanos de las ciudades (Dollfus).

La característica más distintiva de América Latina es la concentración de recursos en la relativamente pequeña cúspide de la pirámide

Las oportunidades de trabajo son más escasas en todo el continente desde 1980 (Franco/Di Filippo; Morley; Rosenthal; Sheahan). Sólo en Buenos Aires, por ejemplo, se perdieron 200.000 empleos durante los primeros cuatro años de la década de los 90 (Altimir 1997; Auyero) y, en la actualidad, por lo menos un tercio de la población argentina podría estar afectado por el subempleo. Los salarios en América Latina siguen siendo bajos respecto a los de los países desarrollados y representan el 30% de los costos de producción, en contraste con el 50% de los países de la OCDE (Reynolds). Todas las fuentes coinciden en reportar un descenso en los niveles salariales (Rosenthal). Por ejemplo, los ingresos promedio de la población trabajadora cayeron en un 40% en Venezuela, 30% en Buenos Aires y 21% en Brasil (Minujin). En Argentina, el salario mínimo se había reducido en 1990 a un 40% de lo que fue en 1980, y en Perú se había reducido al 23%. En el sector industrial, el valor de los salarios era de 78,7% y de 36,2%, respectivamente, lo que condujo a una «pauperización de la fuerza de trabajo» en estos dos países (Figueroa).

Entre las variables de nivel individual, la educación siempre ha sido un factor importante para determinar el ingreso, y durante la última década lo ha sido aún más (Altimir 1997; Berry; Robinson). La distribución de la educación es casi tan sesgada como la del ingreso. Por ejemplo, si comparamos Brasil con Estados Unidos hay evidencias de mayor variación en los niveles de escolaridad y más aún en los rendimientos económicos de la educación (Lam/Levison). En 1980, el 27% de los brasileños de más de 35 años no había recibido educación formal, y un 50% adicional tenía únicamente hasta cuatro años de escolaridad. No resulta entonces sorprendente que los niveles de ingreso de los anal-

fabetos fueran del orden del 6,5% respecto a los salarios de los profesionales universitarios (Reynolds). En 1990, el 13% de los mexicanos no tenía instrucción formal, y el 57,3% tenía seis años de escolaridad o menos. Los estados rurales de Zacatecas, Chiapas y Oaxaca tenían los menores años promedio de escolaridad: casi 3,5 años menos que Ciudad de México (Bracho). La brecha de escolaridad entre los habitantes del campo y la ciudad, en toda América Latina, es de 25,4% entre los hombres, y de 27,5% entre las mujeres (Stromquist). Las familias ricas pueden pagar los costos de las escuelas privadas para sus hijos, mientras que los hijos de las familias de trabajadores asisten a escuelas públicas mal organizadas, reproduciendo generacionalmente las diferencias de clase (DeSilva).

No hay duda que, durante las dos últimas décadas, se ha hecho más perceptible lo que un analista ha llamado el «sesgo regresivo» en la elaboración de políticas (Korzeniewicz/Smith 1996; Rosenthal). Sumadas al resquebrajamiento financiero que se inició con la crisis de la deuda externa de 1982, las presiones terminaron por eliminar al Estado como un nivelador de última instancia. Aún se oye el intenso debate sobre el rol de las políticas neoliberales en el desarrollo de la inequidad en América Latina (Berry; Birdsall/Graham; Izurieta/Vos; Korzeniewicz/Smith 2000; Lustig; Morley; Trejos). Prácticamente no se cuestiona que la debilidad estatal condujo no sólo a la falta de abastecimiento de bienes de primera necesidad, sino que también acentuó el sesgo en la carga impositiva. Aquellos que ganan menos de un salario mínimo reducen en un 37% sus salarios por el pago de impuestos, en tanto que aquellos que ganan 100 veces el salario mínimo contribuyen con menos del 13% (Reynolds). Lamentablemente, los países que pasan por los mayores desafíos sociales son aquellos que destinan un mínimo a los servicios (Altimir 1997). En gran medida, la disminución de la calidad de vida de las clases medias también puede ser explicada por la retirada del Estado de ciertas áreas, y la consecuente disminución de empleo y salario (Berry). En Argentina, los salarios del sector público eran, en 1991, dos tercios de lo que habían sido en 1980, mientras que los maestros ganaban la mitad del sueldo que habían recibido 10 años antes (Cetrangolo). En muchos países de América Latina, replegar al Estado cuando todavía no había cumplido su misión principal resultó desastroso.

El surgimiento de las políticas neoliberales estuvo fuertemente vinculado a una mayor integración de América Latina en la economía mundial (Goldfrank). Existe una larga (y, hoy en día, muy desacreditada) tradición de atribuir los problemas internos del continente a la posición que ocupa en el contexto internacional (Cardoso/Faletto; Gereffi/Fonda); sin embargo es evidente que, en

algunos aspectos, el rol mundial de América Latina contribuyó a acentuar la crisis de la distribución. A partir de 1982, la necesidad de negociar la deuda externa, por ejemplo, puede haber llevado a muchos países a demostrar su rigurosidad adoptando políticas regresivas (Pastor Jr./Dymski). En todo caso, los flujos negativos de capital registrados durante la mayor parte de los años 80 efectivamente debilitaron la habilidad de los gobiernos para mejorar la distribución o atenuar la pobreza (Kaminsky/Pereira). La pesca de inversionistas también modificó el balance de poder entre fuerza de trabajo y capital a favor de este último (Foweraker). La necesidad de proteger la economía de la fuga de capitales y del retiro de inversiones ha limitado la escala y el campo de acción de los Estados. En teoría, la integración comercial debió haber promovido la reducción de la brecha entre los salarios de la mano de obra calificada y la no calificada, como ocurrió en el Asia oriental, pero en América Latina no sucedió lo mismo.

Finalmente, y en el ámbito de las conjeturas, la victoria de EEUU sobre las revoluciones sociales de América Central, combinada con el temor al retorno de los generales, marcó límites que ni el más progresista de los jefes de Estado se animó a cruzar. Aunque, por otro lado, hay evidencia clara de que las presiones globales han apoyado el desarrollo de los derechos de las mujeres y las minorías en la región (Keck/Sikkink).

Pensamos que ningún modelo específico puede abarcar todos los patrones de desigualdad que se encuentran en América Latina, pero el análisis de clase parece proporcionar la representación más precisa de la situación y la más adecuada para explicaciones causales. Siguiendo la propuesta de Portes y una reciente actualización (Portes/Hoffman), la estructura de clases de América Latina consta de los siguientes niveles:

– Una «clase dominante» que comprende del 5% al 13% de la población urbana, dependiendo del país. Concentrada en la capital, incluye a los profesionales, pequeños industriales, burócratas de alto nivel y a un número reducido de quienes ocupan las posiciones de mando.

– La «pequeña burguesía» de comerciantes y empresarios, que constituyen del 7% al 11% de la población urbana. Es el sector que probablemente haya sido más afectado por la globalización de muchas ciudades.

– El «proletariado formal», que constituye del 35% al 40% de la población urbana e incluye tanto a quienes trabajan en grandes fábricas como a quienes lo hacen en los niveles bajos del servicio público.

– El «sector informal», que comprende del 40% al 50% de la población y está compuesto por propietarios de pequeñas empresas informales, trabajadores de esas empresas y la masa de vendedores callejeros y proveedores de servicios, sin seguridad ni protección.

Para completar estas categorías necesitamos añadir a 10% a 40% de la población que vive en las áreas rurales. McVay y Vogt subdividen la estructura de la clase rural en tres grupos: el de los aristócratas, que incluye a la antigua aristocracia de la tierra, las elites políticas y los ricos; el de los empresarios, una clase media compuesta por profesionales y comerciantes; y el de los pobres, quienes por lo general trabajan como mano de obra o personal de servicio de las dos clases superiores. En el estudio, el sector de los pobres incluye tanto a quienes son empleados en la economía informal como a un sector marginado, el de los más pobres de origen indígena.

Como se destacó antes, la característica más distintiva de América Latina es la concentración de recursos en la relativamente pequeña cúspide de la pirámide. Casi siempre se asume que, por lo general, el decil superior representa algo así como la mitad del ingreso nacional, y que el 1% superior acumula casi el total de las riquezas. Esta situación se encuentra exacerbada por la existencia del sector informal, que detenta casi todo el crecimiento del empleo (Franco/Di Filippo). La concentración del poder en el primer sector, y la heterogeneidad del segundo han determinado que sea prácticamente imposible organizar un proyecto político colectivo y coherente, ya que por lo general deriva en ilusorias proclamas populistas que no consiguen más que reproducir las mismas estructuras de clases (Chalmers et al.; Oxhorn).

Precisamente por estas características es que creemos que el lenguaje del análisis de clase, aún siendo útil, no resulta del todo adecuado para América Latina. Las dimensiones de las brechas que separan a los diferentes sectores de la población, la ausencia de proyectos de largo plazo para superar las injusticias, y la estabilidad de una población «intocable» de trabajadores informales parecen exigir el uso de categorías más cercanas a las de un sistema de castas que al de clases. Esta percepción también es sustentada por la coexistencia de niveles elevados de desigualdad con prejuicios raciales.

Quizás la mejor razón para no usar el lenguaje del análisis de clase es que, en la era de posguerra y en los países de la OCDE, ese tipo de discusiones está asociado al poder que se ejerce de un modo oculto y no violento. En América Latina la desigualdad está sustentada por niveles de violencia que evocan el espíri-